

LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.¹

Morán Torres Enoc Francisco*

I. INTRODUCCIÓN. II. LA DISCAPACIDAD Y SUS DIMENSIONES. III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD. IV. LOS DERECHOS POLÍTICOS COMO DERECHOS HUMANOS. V. LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. VI. CONCLUSIONES. VII. FUENTES DE CONSULTA

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el Estado Mexicano y su democracia electoral enfrentan innumerables retos, uno de ellos es el relativo a la garantía de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Toda vez que si bien es cierto a nivel administrativo nacional se han dado avances importantes para dar mayor accesibilidad a la emisión del sufragio activo y a nivel jurisdiccional federal se han emitido sentencias en el mismo sentido además de hacer énfasis en acciones afirmativas para la postulación de candidaturas por la vía partidaria, aún existe un largo camino que logre garantizar el goce y ejercicio de los derechos políticos de un sector de la población que históricamente se ha enfrentado a barreras asimétricas y ha vivido una discriminación estructural.

En efecto, los derechos político-electorales son derechos humanos y, en términos del artículo 1º de la Constitución Mexicana, el Estado tiene la obligación de su promoción, respeto, protección y garantía. Por lo que, no basta con la previsión constitucional de los derechos políticos de la ciudadanía consagrados en el arábigo 35 con relación al diverso 1º ya citado, sino se generan las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que permitan al Estado la garantía de esos derechos y su Justiciabilidad máxime cuando se trata de personas que cuentan con alguna discapacidad en sus diferentes dimensiones. Ello, no implica que

¹ Ponencia presentada en el marco del XXXIV Congreso Internacional de Estudios Electorales, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Mesa V. Resolución de conflictos electorales y acciones afirmativas
Doctor en Derecho, egresado con mención honorífica del programa de Doctorado Interinstitucional en Derecho, reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT; Perfil Prodep; Miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I; enocmoran@ucol.mx; ORCID: 0000-0001-8309-2219.

Se reconoce el apoyo con la búsqueda de información a las estudiantes: Quetzalli García Carrillo, Valeria Flores Hernández, Karen Vianey Magaña Rodríguez y Jacqueline Lara Larios, integrantes del Semillero Iberoamericano de Investigadores de la Red Iberoamericana de Investigación en Derecho y Disciplinas Sociales.

posean derechos distintos al resto de la población, sino que las condiciones para su ejercicio son diferentes.

Así las cosas, los obstáculos que entraña la garantía de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad demandan no sólo acciones inmediatas que vayan más allá de la construcción de estructuras normativas, de compromisos políticos de orden institucional o de espejismos democráticos sino también de la generación de mejores condiciones que permitan la transición hacia una democracia electoral que sea inclusiva.

De ahí que la presente aportación académica tiene como objetivo el reflexionar sobre la garantía de la protección de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.

II. LA DISCAPACIDAD Y SUS DIMENSIONES

La discapacidad, es una afección o deficiencia del cuerpo o mente que hace más difícil que la persona que la tenga, realice ciertas actividades e interactúe con el mundo que le rodea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividades y restricciones de la participación de una persona.

En su proceso evolutivo, refiere Irene Gil (2018), ha pasado de ser asociada a la intervención de poderes sobrehumanos o castigos divinos (culturas antiguas); pasando por la secularización, segregación y estigmatización del siglo XV a partir de la creación de las primeras instituciones manicomiales; luego, a raíz de la segunda guerra mundial se visibiliza a las personas con discapacidad para que, en el siglo XX el Estado adquiriera un papel paternalista “*que refuerza la dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral*”; hasta llegar a la actualidad, donde se habla más que de una asistencia, de una inclusión, de manera que, actualmente se han generado los espacios para que las personas con discapacidad, tomen un papel activo en la sociedad.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo de actuación para quienes imparte justicia en casos que involucren derechos de personas con Discapacidad, en el que precisó que:

Las personas con discapacidad son un grupo de población que tradicionalmente ha sido estigmatizado, rechazado por la sociedad y objeto de múltiples discriminaciones que los han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social debido a que los estigmas sociales califican como diferentes a las personas con algún tipo de diversidad funcional, debido, en gran parte, a que su condición de discapacidad, a juicio de la mayoría, se aleja de los estándares considerados “normales”, que califican como diferentes a las personas con algún tipo de diversidad funcional y las condena a una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones, y violación o vulneración constante de ellos.

Lo anterior tiene su origen en las diversas barreras actitudinales, culturales y físicas que la sociedad impone a las personas con discapacidad, consciente o inconscientemente, pues en razón de su ausencia en los distintos escenarios de carácter público y privado, se genera la idea de que no forman parte de la sociedad, y lo más grave, que no son capaces de ejercer sus derechos, ni de gozar de la autonomía y libertad para tomar sus propias decisiones. (2014, 8)

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el 16% de la población mundial sufre de una discapacidad importante y que existen diversos factores que contribuyen a las desigualdades con relación a la salud: factores estructurales; determinantes sociales de la salud; factores de riesgo y sistema de salud. (OMS, 2023).

En ese sentido, según la referida organización, la discapacidad forma parte del ser humano y es consustancial a la experiencia humana además de que su inclusión es importante para lograr la Agenda del Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS (OMS, 2023).

Por su parte, para la Organización Panamericana de la Salud precisa que *Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. (OPS, s.f.).*

De igual manera, indica que, en el caso de América Latina, el 12% de la población vive con al menos una discapacidad además de que las personas con discapacidad enfrentan diversas barreras, entre las que se encuentran: espacios de salud, comunicación, financieras y falta de formación de profesionales. (OPS, 2023).

Así las cosas, entre los tipos de discapacidad se encuentran las siguientes:

Física: *En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel musculo esquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre otras (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011).*

Auditiva: *personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad; como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. Se incluye en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia esto es, aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva presentan dificultades en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversación e incluso sonidos con mayor intensidad que la voz conversacional, según el grado de pérdida auditiva (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011)*

Visual: *incluye a aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja visión, es decir, quienes a pesar de usar gafas o lentes de contacto, o haberse practicado cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o ambos ojos (Ministerio de la Protección Social & ACNUR, 2011).*

Sordoceguera: es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas que la presentan problemas de comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. Algunas personas sordociegas son sordas y ciegas totales, mientras que otras conservan restos auditivos y/o restos visuales. Las personas sordociegas requieren de servicios especializados de guía interpretación para su desarrollo e inclusión social

Intelectual: personas que presentan deficiencias en las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, et aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. Estos producen deficiencias del funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social, et funcionamiento académico u ocupacional y la independencia personal en la casa o en la comunidad.

Psicosocial/ Mental: personas con deficiencias (alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su duración, coexistencia, intensidad y afectación funcional) y las barreras del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad.

Múltiple: Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que requieren para su atención de apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades de la discapacidad múltiple no están dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, sino por la interacción que se presenta entre ellos. (Asmet, s.f.)

De lo expuesto con antelación se advierte que la discapacidad está presente en la vida cotidiana de las personas y el Estado tiene frente así el reto de contribuir a formas sociedades inclusivas.

III. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA DISCAPACIDAD

Existen diversos instrumentos internacionales relacionados con el tema de las personas con discapacidad, entre los que se advierten los siguientes:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), misma que en sus numerales 1, 2 y 21, en la parte que interesa establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

ARTÍCULO 2

1. **Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna** de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento **o cualquier otra condición.**

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

ARTÍCULO 21

1. **Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,** directamente o por medio de representantes libremente escogidos. (El énfasis es propio).

De igual forma, la Carta Democrática Interamericana (2001) en sus arábigos 5 y 23, prevé lo siguiente:

Artículo 9:

***La eliminación de toda forma de discriminación**, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, **y de las diversas formas de intolerancia**, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.*

Artículo 23:

Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.

***Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales**, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito. (El énfasis es propio).*

Además, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (2001) en los artículos I, II, III y IV establece lo siguiente:

ARTÍCULO I

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:

1. Discapacidad

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

2. Discriminación contra las personas con discapacidad

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular

el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.

ARTÍCULO II

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y **propiciar su plena integración en la sociedad.**

ARTÍCULO III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. **Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad,** incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

a) **Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración;**

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo.

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.

ARTÍCULO IV

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.

2. Colaborar de manera efectiva en:

a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. (El énfasis es propio).

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) en su artículo 26 precisa que:

*Artículo 26: **Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.** A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.* (El énfasis es propio).

Finalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) en sus numerales 1, 12 y 29 prevé:

Artículo 1: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 12 “Igual reconocimiento como persona ante la ley”

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para

impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. (...).

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes **tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, (...).**

Artículo 29:

Participación en la vida política y pública Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad **puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás,** directamente o a través de representantes libremente elegidos, **incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas,** entre otras formas mediante:

i) La **garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;**

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a **emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;**

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, **permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;**

b) **Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás,** y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:

i) *Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;*

ii) La *constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local,* y su incorporación a dichas organizaciones. (El énfasis es propio).

De los ordenamientos señalados en líneas anteriores se advierte la preocupación internacional por contar con un marco normativo que más allá de prever, proteja y haga efectiva la garantía en el ejercicio de los derechos humanos que poseen las personas con discapacidad.

IV. LOS DERECHOS POLÍTICOS COMO DERECHOS HUMANOS

Los derechos políticos son derechos humanos. Por lo tanto, son inherentes a la naturaleza humana y su reconocimiento coadyuva a la protección estatal. Sin embargo, el devenir temporal de los citados derechos indica que éstos no han representado necesariamente una concesión del Estado. Al contrario, han logrado su visibilización a través de la protesta social.

Aunado a lo anterior, los derechos políticos también han adquirido la connotación de fundamentales al ser incorporados al orden jurídico positivo de diversas constituciones. Ello, ha impulsado la creación de mecanismos que buscan, con mayor o menor éxito, ser eficientes en su tutela y garantía.

En efecto, los derechos políticos dada su naturaleza como derechos humanos, no requieren su reconocimiento expreso en los textos constitucionales y legales para su existencia, pero sí es relevante ello para efectos de su protección.

Así las cosas, los multirreferidos derechos poseen las características siguientes: universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. De hecho, para Amnistía Internacional, los derechos humanos: 1. Son intrínsecos; 2. Irrenunciables; 3. Inalienables; 4. Universales; 5. Interdependientes; 6. Indivisibles; 7. Progresivos; 8. Imprescriptibles; 9. Inderogables y 10. En constante evolución. (Amnisty, s.f.)

Lo expuesto con antelación es posible identificarlo en la Declaración de los Derechos Humanos al establecer que *la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el*

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, destacando la importancia de que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de derecho. (Declaración, 1948)

Además, se advierte en la Convención Americana de los Derechos Humanos en cuyo artículo 1 se establece el compromiso de los Estados para respetar los derechos, así como garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación de cualquier índole mientras que el numeral 2 prevé el compromiso de los Estados para adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos. (Convención, 1969)

Cabe destacar que en el ordenamiento en cita se reconocen los derechos: a la vida; a la integridad personal; al reconocimiento de la personalidad jurídica; a la integridad personal; a las garantías judiciales; a la indemnización; a la libertad de conciencia y religión; de pensamiento y expresión; de rectificación; de reunión; libertad de asociación; al nombre, así como las prohibiciones a la esclavitud y a la servidumbre, por referir algunos.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé: el compromiso de los Estados para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y el goce de sus derechos civiles y políticos mientras; la libertad de pensamiento; la libertad de expresión; de reunión pacífica; de asociación; participación en la dirección de los asuntos públicos; de votar y ser votado; de acceso a las funciones públicas del país y de igualdad. (Pacto, 1966)

Asimismo, la Carta Democrática interamericana reconociendo el derecho a la democracia y la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla, así como el reforzamiento y la profundización de la democracia con la participación ética y responsable de la ciudadanía, en los que el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, son elementos esenciales de la democracia representativa. (Carta, 2001)

De los ordenamientos indicados en líneas superiores es posible identificar que existen diversos derechos humanos vinculados con el ámbito político electoral como es el caso de libertad de expresión y manifestación, de asociación y de reunión; votar y ser votado; así como de participación en asuntos públicos, destacándose la igualdad y la prohibición de la no discriminación.

V. LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hablar de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad resulta paradigmático toda vez que, en esencia se refiere a los derechos humanos que todas las personas poseen sin distinción ni discriminación, vinculados con el involucramiento en los asuntos públicos del país. Sin embargo, posee un matiz, las personas con discapacidad no necesariamente poseen las mismas condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales que sí poseen aquellas personas que no tiene una discapacidad.

En virtud de lo anterior, en el caso particular de México se han realizado esfuerzos institucionales tendientes a generar mejores condiciones para la tutela y garantía de los referidos derechos que van desde la regulación normativa atiente, las sentencias en modalidad de lectura fácil cuando de acceso a la justicia se trata hasta la aprobación de medidas administrativas para facilitar la participación en los procesos comiciales.

En esa tesitura, se destaca que a nivel legislativo el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación motivada por la discapacidad de la persona.

Ahora bien, respecto del acceso a la justicia, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación realizó algunos ajustes al procedimiento para garantizar el derecho de acceso a la justicia, entre los que se encuentran: reproducción de constancias en Braille; ajustes a los plazos de procedimiento; adaptación de salas de audiencia y entorno; sentencias en formato de lectura fácil e intérpretes a Lengua de Señas Mexicana.

Además, se aprobó el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Discapacidad en el que estableció diversas obligaciones para personas juzgadoras, entre las que se encuentran: iniciales para estar en posibilidad de juzgar con perspectiva de discapacidad; transversales del procedimiento; al momento de resolver el fondo de la controversia y al momento de dictar sentencia. (Suprema Corte, 2022, 127-282)

Ahora bien, con la finalidad de generar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos político-electorales, el Instituto Nacional Electoral (s.f.) ha sostenido que:

*La promoción y protección de los derechos humanos de personas con discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y dignidad, **deberá realizarse mediante una serie de acciones transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, así como el garantizar la accesibilidad física, de información y comunicaciones para personas con discapacidades sensoriales, mentales o intelectuales.*** (El énfasis es propio)

Asimismo, mediante Acuerdo identificado con la clave y número INE/CG161/2017, el Instituto Nacional Electoral determinó una serie de acciones para incrementar la participación de las personas con discapacidad en los procesos comiciales, entre las que se encuentran: mampara adaptable a sillas de ruedas y personas de talla pequeña; platilla Braille y el protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de casilla, entre otros. (2017, 2)

De igual manera, emitió una carta compromiso como respuesta a peticiones de las personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil, en la que se destaca: realizar simulacros; capacitar a personas con discapacidad; promover casillas en lugares accesibles; dotar a casillas de instructivos y plantillas Braille así como mamparas especiales; permitir el acceso a personas acompañadas de perros guía; incorporar traductores de Lengua de Señas Mexicana; analizar la implementación de la capacitación sobre el ejercicio del voto a escuelas de la comunidad Down; incorporar distintivos a la credencial para votar que reflejen si la persona electora tiene algún tipo de discapacidad, entre otras. (2018, 2-5).

Lo anterior, en gran medida coincide con el Decálogo relativo a las elecciones y derechos de las personas con discapacidad difundido por el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y COAMEX en el que se destaca que las personas con discapacidad poseen derechos relacionados con: recibir trato respetuoso de las personas funcionarias de casilla; contar con casillas en espacios accesibles; ser consultadas antes y después del proceso electoral sobre medidas de inclusión, entre otras. (s.f.)

Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el criterio de rubro PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES TIENE EL DEBER DE ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE

GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA DE ACUERDO AL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD, en el que se destaca lo siguiente:

*todas las autoridades del Estado se encuentran obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, así como la no discriminación de las personas con discapacidad; por tanto, **se deberán tomar acciones preventivas o preliminares, tales como, el acondicionamiento estructural de espacios físicos, la asignación de un asesor jurídico, o el acompañamiento de personas de confianza durante el desarrollo del proceso;** asimismo se deberán tomar acciones, con motivo del dictado de una resolución, sobre la base de un estándar que considere, entre otras medidas, la aplicación efectiva de las normas internacionales de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad; (...); evitar aplicar automáticamente medidas genéricas de protección tutelar, y estudiar cuáles son las que se requieren en el caso concreto; realizar los ajustes razonables en el procedimiento, a efecto de que no constituya una carga; **no exigir formalidades procesales que vulneren el acceso a la justicia; aplicar en sentido amplio la suplencia de la queja, y redactar resoluciones con formato de lectura fácil o accesible.**(2023)*

(El énfasis es propio)

Lo expuesto anteriormente, permite advertir la importancia que las autoridades tanto administrativa como jurisdiccional, le han otorgado a la garantía de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, reconociendo que, si bien poseen los mismos derechos, deben de contar con medidas transversales que les provean de una protección más robusta.

VI. CONCLUSIONES

La garantía de los derechos político-electorales de las personas representan un gran reto para el Estado. No obstante, existe un marco normativo internacional que permite contar con directrices para impulsar una sociedad inclusiva y contar con elementos legales que fortalecen la tutela de los referidos derechos.

Además, en el caso particular de México el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han dictado una serie de medidas tendientes a

mejorar las condiciones en las que las personas con discapacidad ejercer sus derechos político-electorales. No obstante, aún quedan asignaturas pendientes como incrementar el número y tipo de medios de comunicación e información que se utilizan para difundir la cultura democrática, las campañas electorales y las formas de participación ciudadana en los procesos electorales a partir de considerar la diversidad de discapacidades que existen.

VII. FUENTES DE CONSULTA

Amnisty International. (s.f.). *10 características de los derechos humanos*. <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/10-caracteristicas-de-los-derechos-humanos/>

Asmet. (s.f.). *Todo sobre la población con discapacidad*. <https://www.asmetasalud.com/blog/poblacion-en-condicion-de-discapacidad>.

Gil Irene (14 de noviembre de 2018). *¿Qué es la discapacidad?. Evolución histórica y cultural*. <https://fundacionadecco.org/blog/que-es-la-discapacidad-evolucion-historica/>

Instituto Nacional Electoral. (s.f.). *Personas con discapacidad ¿Quién puede votar en México?*. <https://igualdad.ine.mx/igualdad/personas-con-discapacidad/>.

Instituto Nacional Electoral. (s.f.) *Decálogo Elecciones y Derechos de las Personas con Discapacidad*. <https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/01/DECALOGO.pdf>.

Instituto Nacional Electoral. (2017). *Acuerdo INE/CG161/2017*. https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2017/05_Mayo/CGex201705-10/CGex201705-10-ap-2.pdf.

Instituto Nacional Electoral. (2018). *Carta compromiso del Instituto Nacional Electoral en respuesta a las peticiones de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil que les representan*. <https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2021/01/CARTA-COMPROMISO.pdf>.

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (S.f.). *Definición de Discapacidad: Según la OMS*. https://www.mintrabajo.gob.gt/images/Servicios/DEL/Informe_del_Empleador/Clasificaci%C3%B3n-CIF-Tipos-de-Discapacidad_CIF.pdf.

Organización de Estados Americanos. (1969). *Convención Americana de los Derechos Humanos*. <http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm>.

Organización de Estados Americanos. (2001). *Carta Democrática Interamericana*. https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm.

Organización de Estados Americanos. (2001). *Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad*. <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html>.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Organización de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

Organización de las Naciones Unidas. (2008). *Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad*. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>.

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Discapacidad*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.

Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). *Discapacidad*. <https://www.paho.org/es/temas/discapacidad>.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). *Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad*. <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-04/Protocolo%20para%20Juzgar%20con%20Perspectiva%20de%20Discapacidad.pdf>.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2014). *Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad*. https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_discapacidad.pdf.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2023). *Jurisprudencia 7/2023*. <https://www.te.gob.mx/ius2021/#/>.